

Los retos de la ciencia política en Colombia

Fredy Barrero / Sergio Angel

Universidad Sergio Arboleda, Bogotá

Retrospectiva

La ciencia política en Colombia, al igual que en otras latitudes, tuvo un doble surgimiento: por un lado, desde su condición de “enajenada”, por otro, en su condición de disciplina “autónoma”. En relación con lo primero, se puede decir que la disciplina aparece en Colombia a partir de asignaturas impartidas en programas de derecho o de humanidades en las que incluso se otorgaba el título de pregrado en “Derecho y Ciencias Políticas”. Pero además de que los abogados terminaban por añadidura obteniendo un título de politólogos, los profesionales de otras disciplinas (principalmente sociólogos e historiadores) realizaban agudos análisis de la situación política del país, que les acreditaba en la esfera pública como analistas políticos y, por ende, como “politólogos”. Lo cierto es que hacia los años noventa, con el *boom* de pregrados en el país, una tendencia generalizada fue la independencia de la ciencia política como disciplina, pero en el marco de las facultades de derecho, es decir, programas con un fuerte influjo jurídico impartidos en su mayoría por abogados, sociólogos e historiadores.

En cuanto a lo segundo, cabe resaltar como hito histórico la creación en 1968 del primer programa de pregrado en una universidad colombiana (Universidad de los Andes), conducente al título de politólogo, y los posteriores programas de posgrado en “Estudios Políticos”. Pero la autonomía de la disciplina no se constituyó con la aparición de los primeros programas, sino más

bien con la institucionalización progresiva de la disciplina. Por esa razón se pueden rescatar cuatro momentos generales del desarrollo de la ciencia política como disciplina independiente en Colombia. El primer momento, de *exclusividad*, que no exclusión, se caracterizó por la existencia única del programa de ciencia política de la Universidad de los Andes, acompañado de programas de posgrado y de algunos institutos que realizaban análisis sobre temas específicamente políticos, sobre todo en relación con el conflicto armado colombiano.

El segundo momento, de *competencia restringida*, se da a partir de mediados de los noventa, cuando algunas pocas universidades tomaron la decisión de abrir programas de pregrado y por ende la oferta se diversificó, no solo en relación con la naturaleza de las instituciones (públicas y privadas) que ofertaban el programa, sino también con los planes de estudio y las corrientes epistemológicas. Los nuevos programas, sobre todo aquellos que aparecieron en las facultades de derecho, apelaban a una tradición continental en la que se privilegiaban perspectivas hermenéuticas y se rechazaban las visiones conductistas de la ciencia política norteamericana. En este contexto, cabe resaltar que aunque la mayoría de los programas aparecieron en Bogotá, la Universidad del Cauca marca el inicio de la descentralización de los mismos.

El tercer momento, de *competencia*, se caracteriza por la proliferación de programas de pregrado no solo en la capital sino en otras ciudades del país, llevando a un crecimiento descentralizado de la disciplina y la falta de profesionales con maestría o doctorado que impartan las asignaturas e investiguen y que a su vez soporten el creciente número de programas. Pero tal vez una de las mayores particularidades de este momento fue que

los nuevos programas, aunque se establecían bajo el ropaje institucional de la ciencia política, presentaban nomenclaturas muy diversas, dejando entrever la discusión epistemológica de la disciplina. Pero ¿a qué respondía esta heterogeneidad en la denominación de los programas? Sin duda se podría hablar de dos interpretaciones: o bien, el nombre obedecía a la necesidad de competir en un “mercado educativo” cada vez más competitivo en donde un apellido como “Gobierno” o “Relaciones Internacionales” podía hacer más atractivo un programa que otro, o simplemente cada programa decidió denominarse acorde a sus creencias formativas e intereses de profesionalización, de aquellos convocados para iniciar cada nuevo programa.

Finalmente, el cuarto momento evidencia un *proceso paulatino de institucionalización disciplinar*, que ha estado marcado por la aparición de programas de doctorado (en universidades públicas y privadas), el surgimiento de la Asociación Colombiana de Ciencia Política, y el incremento de docentes e investigadores con doctorados (obtenidos en universidades norteamericanas y europeas principalmente). Un proceso que, por un lado, bien podría significar la madurez de una disciplina joven, pero también un paso de la “pregradización” a la “posgradización”, es decir, el salto necesario entre la oferta de programas de pregrado a la oferta de programas de posgrado en relación con el creciente número de profesionales. De cualquier manera, este paso parece necesario y la disciplina cada vez cobra más importancia no solo dentro de las ciencias sociales sino también en el campo político y en la sociedad.

En suma, la ciencia política en Colombia ha recorrido un largo camino en su proceso de institucionalización, logrando, aun con dificultad, el establecimiento de

una disciplina autónoma. Pero si se tiene en cuenta que en dos décadas el panorama desierto de la disciplina se cambió por un terreno fértil de politólogos habidos de un campo profesional que cobra mayor relevancia en un país *ad portas* de un proceso de reconciliación histórico y un escenario de posconflicto sin precedentes, es preciso decir que la disciplina ha dado pasos de gigante en su proceso de reconocimiento externo e interno.

A dicha aceptación se suma la reciente ola de retorno de profesionales con títulos de posgrado obtenidos en universidades extranjeras, fenómeno que ha traído consigo el enriquecimiento de los enfoques teóricos clásicos y la inclusión de nuevas líneas de trabajo como los estudios de género, la teoría *queer*, los estudios sobre políticas judiciales, entre otros. Estos temas se fueron integrando al eje central de la disciplina en Colombia marcado por la triada conflicto armado/procesos electorales/partidos políticos y teoría política.

¿La ciencia política está de moda?

La ciencia política, y carreras afines, aparentemente pasan por un momento en el que se han convertido en carreras de “moda”, o al menos así se puede ver en el crecimiento en el número tanto de programas como de los estudiantes que las integran. Pero también ha permitido que aquellos que retornan después de sus estudios de posgrado propongan aportes teóricos y metodológicos que acercan a la disciplina a nuevas preguntas y a nuevas formas de responderlas. En consonancia con los aportes que hacen los académicos “repatriados”, la disciplina se ha ido vigorizando e institucionalizando con la creación de la Asociación Colombiana de Ciencia Política (la cual celebra cada dos años su congreso nacional), la aparición de

nuevas publicaciones científicas indexadas internacionalmente y con referato ciego, así como la multiplicación de programas de posgrado (maestrías y doctorados).

No obstante, el incremento en el número de pregrados genera algunas inquietudes respecto a la pregunta normativa de qué tan positivo o no es esto para la misma ciencia política. Revisemos algunos aspectos de esta proliferación. A nuestro juicio, esta ha permitido una descentralización disciplinar, toda vez que los programas no se ubican exclusivamente en Bogotá (aunque la mayoría de los programas tengan asentamiento ahí), sino que están ubicados en diferentes ciudades del país, lo cual sienta las bases para que desde la ciencia se respondan preguntas que obedecen a lógicas políticas que desbordan a la misma capital. Ahora bien, esta descentralización disciplinar, concomitante con un incremento en el número de programas de pregrado (principalmente en Bogotá), llevó a preocupaciones respecto a la formación de los docentes e investigadores que la integran, pues no siempre tienen títulos de posgrado (en particular de doctorado). En ese sentido, a la plausibilidad de tener un crecimiento en el número de programas de pregrado, algunos politólogos han planteado dudas respecto a la calidad de los mismos. No obstante, como se ha demostrado en la historia reciente de los programas de pregrado en Colombia, estos han ido creciendo en una combinación entre profesionales con títulos de pregrado y posgrado, evidenciando un respeto por la disciplina que trasciende la exclusividad de los títulos. Por supuesto, se espera que esta situación se vaya modificando con el transcurrir de los años, y conduzca a que los programas tengan cada vez más miembros con estudios de doctorado, que promuevan correr la barrera del conocimiento disciplinar, así como aportar a la solución de los problemas que aquejan a la sociedad colombiana.

En este contexto, se debe mencionar la débil intención de formalizar la disciplina que hizo el Ministerio de Educación Nacional en 2007 mediante la Resolución Nacional 466. En esta se planteó una división entre los programas de “ciencia política” y los de “gobierno y relaciones internacionales”, mediante el establecimiento de unos mínimos teóricos, metodológicos y de desempeño profesional para estos programas académicos y para otros de ciencias sociales y humanas (aunque sin carácter vinculante). Asimismo, el Congreso de la República ha intentado establecer un colegio de politólogos y un código de ética, hasta ahora por fortuna infructuosamente. Este hecho fue significativo para la disciplina, pues no solo convocó a profesionales de diversas universidades, sino que también contribuyó a que la Asociación Colombiana de Ciencia Política planteara el debate tanto en el Congreso como en los medios de comunicación, logrando que el proyecto fuera archivado.

¿Hacia dónde va la ciencia política colombiana?

Nos concentraremos en dos retos generales que afronta hoy día la disciplina. Por una parte, están los académicos, y por otra, los profesionales.

En cuanto a los retos académicos, la disciplina enfrenta hoy día un desafío en cuanto a la producción académica resultado de la investigación, pues más que darse una discusión en el seno mismo de la disciplina, las evidencias en cuanto a la financiación estatal de proyectos de investigación dan a entender que nuestros temas de investigación académica no revisten mayor relevancia, tal y como acontece en otros países. Veamos cómo la perspectiva internacional empieza a llegar a nuestro país (seguramente de manera indirecta): a

los pocos meses de la elección de Obama como presidente de Estados Unidos, el politólogo estadounidense Joseph Nye se preguntó en *The Washington Post* en abril de 2009 por qué había tan pocos politólogos en el entorno cercano al presidente norteamericano. Su respuesta fue contundente: sus investigaciones no dan respuesta a situaciones reales. En 2012, también en Estados Unidos la National Science Foundation (agencia federal, encargada de apoyar las investigaciones científicas, incluidas las de ciencia política) tomó la decisión de no continuar con sus aportes a la investigación en esta disciplina, al parecer por los escasos aportes que las investigaciones de los politólogos hacían a la seguridad nacional y a los intereses económicos de los Estados Unidos de Norteamérica. Retomando el caso colombiano, aunque la discusión no ha sido tan directa, cabe resaltar que Colciencias, organismo rector y orientador de la investigación colombiana, cada vez más prioriza proyectos de ciencia, tecnología e innovación (CTI), que aquellos que tienen que ver con los temas de análisis propios de la disciplina, toda vez que la agenda del gobierno nacional se enfoca más en la transformación productiva que en la social. Cabe resaltar que aunque la investigación en temas de transformación social es apoyada por el gobierno nacional, las partidas presupuestales se han concentrado más en avances en CTI. Esto, por supuesto, tiene que ver con la necesidad de promover emprendimientos que generen una mayor rentabilidad, evidenciado en indicadores de desarrollo, en especial económicos y de emprendimientos, a diferencia de las ciencias sociales, cuyos resultados no reflejan necesariamente rentabilidad o no son medibles en el corto plazo. ¿Qué hacer al respecto? Por una parte, es indiscutible la necesidad de que los proyectos de investigación empiecen no solo a dar respuesta

a las preguntas que nos hacemos desde lo eminentemente teórico, sino que involucren respuestas a las situaciones problemáticas de la sociedad y del entorno político doméstico e internacional. En ese sentido, por ejemplo, ante un exitoso proceso de paz con la guerrilla de las FARC, los politólogos deberían estar en disposición de plantear alternativas viables de reinserción política y desarrollo productivo de los desmovilizados.

Ahora bien, aunado al anterior ejemplo, se deriva otro reto disciplinar: el distanciamiento entre la realidad política y los actores políticos por un lado, y la academia por el otro lado. Si nosotros vemos a los políticos como “ratas de laboratorio”, ellos nos ven a nosotros con extrañeza y lejanía. Cada vez que nos acercamos a un político, su primera reacción, en un lenguaje glamuroso, es: “Lo que usted plantea está bien en los libros, pero no se corresponde con lo que es la realidad”. Es decir, aquello que estudiamos así como sus actores, se quejan de nuestras interpretaciones y análisis, al considerarlos lejanos de la realidad. Y es posible que los críticos no estén equivocados, pues la sofisticación metodológica nos ha conducido hacia un camino en el que se analiza el resultado (mediante las cifras y los datos) y no tanto el proceso, el día a día, la construcción de las realidades políticas, que también deberían interesarnos.

Otro reto académico lo constituye la construcción de conocimiento, a partir del análisis y la postulación de respuestas interdisciplinarias a problemas políticos y sociales. Las barreras del conocimiento no solo se corren por la “inercia” propia disciplinar, sino por la construcción conjunta de respuestas con otras disciplinas. El reto está en despojarnos de nuestras taras propias de un crecimiento “sufrido”, resultado de la colonización que otrora realizaran otras disciplinas, y que nos dejaron con un

tufillo amargo respecto a nuestra autoubicación y autodefinición, de lo que algunos han denominado un estatuto propio de la ciencia política.

Los retos académicos están concatenados con los retos profesionales. Los egresados de programas de pregrado tienden a autodefinirse como un mar de conocimiento, con un centímetro de profundidad. Es decir, sienten el peso de la especialización que la disciplina genera continuamente. Esto tiene efectos directos en el autoposicionamiento del profesional, el cual, más que ser politólogo, cada vez busca autodefinirse como experto en un tema determinado (en partidos, políticas públicas, filósofo político, o comparativista).

Profesionalmente, las universidades tienen el reto de identificar, formar y promover diversas alternativas laborales y ocupacionales de sus egresados, que entre otras generen diferenciadores en un contexto de alta competencia. ¿Qué tipo de perfil ocupacional estamos buscando? Los programas académicos propenden por formar a sus estudiantes para que se desempeñen en la burocracia estatal, en la diplomacia y en el sector privado. Pero el reto está en identificar si realmente se están dando las herramientas para que los egresados tengan acceso a estos sitios laborales. Por ejemplo, los programas universitarios contribuyen a una formación disciplinar sólida (en teorías, paradigmas, enfoques, técnicas de investigación, etc.), pero en algunos casos se evidencia una ausencia de asignaturas en las que prevalezcan herramientas prácticas que contribuyan al desempeño laboral o que promuevan el desarrollo de emprendimientos. Es como si en nuestro rol de docentes quisiéramos que nuestros estudiantes caminaran nuestros pasos, y no que ellos innovaran en el ejercicio profesional. Por supuesto lo anterior plantea el siguiente interrogante,

que sería digno de tratarse con más profundidad en otra publicación: ¿debe la universidad propender por que el estudiante sea un emprendedor e innovador?

En materia ocupacional, los egresados de programas de ciencia política cuentan con oficinas de egresados, de la universidad o del programa al que pertenecen, lo cual ofrece un aporte fundamental para reducir la tasa de desempleo de los profesionales. Hoy en día, dicha tasa se acerca al 30%, según datos del Ministerio de Educación Nacional. No obstante, aún no hay estudios que demuestren si el 70% de egresados con empleo están desarrollando actividades “propias” o “afines” al quehacer del politólogo.

En conclusión, la ciencia política colombiana ha evolucionado satisfactoriamente en Colombia, con los retos que hemos consignado aquí y con muchos otros que seguramente se nos escapan. Tal vez la mejor forma de enfrentar estos retos consista en entender que debemos acercarnos a la realidad y contribuir a responder las preguntas que la misma sociedad se hace, con base en los avances científicos que nuestra disciplina ha creado. Lo anterior, sin dejar de lado, la importancia de las discusiones disciplinares que tengamos que dar, y que nos permitan replantear o poner en tela de juicio aquellos conocimientos que hemos adquirido y que terminamos autoimponiéndonos como verdades irrefutables.